

**JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN  
RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE VALLEDUPAR – CESAR**



**SGC**

**SENTENCIA DE TUTELA N° 072**

Radicado N° 20001-31-21-001-2023-00086-00

**Valledupar, veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023).**

**Tipo de proceso:** ACCIÓN DE TUTELA.  
**Demandante/Solicitante/Accionante:** LILIAM MAGRET BALLESTEROS PALLARES.  
**Demandado/Oposición/Accionado:** REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL – REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SAN DIEGO (Cesar).  
**Radicado N° 20001-31-21-001-2023-00086-00.**

**I. ASUNTO A TRATAR:**

Procede el Despacho a dictar la sentencia que en derecho corresponda en la presente Acción de Tutela, promovida a nombre propio por **LILIAM MAGRET BALLESTEROS PALLARES** contra la **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL – REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SAN DIEGO** (Cesar), por considerar que la entidad accionada ha vulnerado su derecho fundamental a elegir y ser elegido.

**II. HECHOS RELEVANTES:**

La tutela tiene como fundamentos fácticos los siguientes:

**PRIMERO:** Manifiesta la accionante, que el veintinueve (29) de julio de 2023, se inscribió como candidata al concejo municipal de San Diego (Cesar), con aval del movimiento político Colombia Humana, presentado ante la Registraduría Municipal.

**SEGUNDO:** Que con posterioridad a su inscripción en la forma indicada en el numeral anterior, a la Registraduría fue enviada el acta de concertación de la coalición del Pacto Histórico, por lo que el Registrador anuló la primera inscripción para proceder a realizarla por la coalición, pese a que con el acta, no llegaron los coavales de los partidos que la integran.

**TERCERO:** Que por lo anterior, al cerrarse la plataforma de la Registraduría, el 29 de julio de 2023 a las 12:00 de la noche, no quedó inscrita su candidatura, lo que considera vulnera sus derechos a elegir y ser elegida, por cuanto cumplía con los requisitos para ser candidata por el movimiento político Colombia Humana.

**III. PRETENSIONES:**

Con fundamento en los hechos relacionados, la accionante solicita la tutela de su derecho fundamental a elegir y ser elegida, en consecuencia, se ordene a la **REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SAN DIEGO** (Cesar), permitirle su inscripción para ejercer su derecho de participación democrática y tener la opción de ser elegida.

#### IV. ACTUACIÓN PROCESAL:

Dentro del trámite de la presente acción, a efectos de reunir los elementos de juicio necesarios para decidir su viabilidad, se ordenó a la accionada **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL – REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SAN DIEGO**, que en el término de un (1) día contados a partir de la notificación del auto admisorio, rindiera un informe sobre los hechos que dieron origen a la acción de tutela.

Asimismo, teniendo en cuenta los hechos de la tutela y pretensiones de la tutela, se ordenó la vinculación del **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**, corriéndose el traslado respectivo.

En el mismo auto, se solicitó a la accionante allegar al expediente, copia de la solicitud de inscripción presentada ante la accionada con la respectiva constancia de recibido, además de los documentos aportados con dicha solicitud, así como, la certificación de aval otorgado por el partido o movimiento político con personería jurídica que avaló su candidatura.

Las entidades accionada y vinculada, descorrieron el traslado de la tutela en los siguientes términos:

El **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, pues carece de competencia para llevar a cabo inscripciones de candidatos, lo cual está a cargo de la **Registraduría Nacional del Estado Civil**. Por tanto, solicita desvincular a dicha entidad de este trámite.

Por su parte, la **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**, explicó que esa entidad cuenta con dos (2) niveles para el cumplimiento de su misión institucional, el nivel central y el nivel desconcentrado.

Que en lo que atañe a las candidaturas a la alcaldía, concejo municipal y juntas administradoras locales, la competencia para la inscripción de candidaturas recae en los Registradores Especiales y municipales del Estado Civil, que en el caso concreto es la **Registraduría Municipal de San Diego**.

Relaciona una serie de normas y explica el procedimiento para inscripciones de candidatos, así como los requisitos de obligatorio cumplimiento que se deben observar para el efecto.

Adujo, que en el presente caso no existen pruebas que sustenten los reparos al actuar de la Registraduría.

Frente a la inscripción de la accionante, informó que la Oficina Registral de San Diego, advirtió que no se cumplían con los requisitos para la misma, puesto que nunca llegaron los documentos soportes para crear la coalición por la cual pretendía inscribirse. De manera que la Registraduría Municipal de San Diego, cumplió con sus funciones electorales y no es responsable del descuido o negligencia de los partidos y de los mismos candidatos, de presentarse a inscribir las candidaturas a última hora presentando documentos que no cumplían con el lleno de requisitos para tal propósito.

Por lo anterior, solicitó negar la acción constitucional, toda vez que la accionada cumplió con sus funciones conforme al marco jurídico correspondiente.

Finalmente, la **REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SAN DIEGO**, explicó que implementó una herramienta tecnológica en ambiente web cuyo usuario y contraseña fue entregado previa solicitud de cada Partido, Movimiento, Grupo Significativo de Ciudadano y Coalición, lo anterior en atención a la modernización e implementación de herramientas tecnológicas al proceso electoral.

Que ante su despacho, el Partido Colombia Humana realizó proceso de inscripción de las candidaturas a la alcaldía y concejo municipal de San Diego, las cuales fueron autorizadas pues cumplían los requisitos generales y específicos.

Sin embargo, una vez aprobada y cargada toda la información a la plataforma para ambas candidaturas y cuya confirmación fue enviada al correo electrónico respectivo y fuera del horario establecido para el proceso de inscripción de candidaturas (10:08 p.m.), le fue presentada solicitud de inscripción por Coalición, ante tal solicitud, manifesté de manera verbal que para acceder a dicha petición, debía solicitar la reversión del proceso realizado con ambas candidaturas previa solicitud al nivel central a través de la mesa de ayuda, a lo cual asintieron

enérgicamente que se reversara, por lo que procedió a comunicarse vía telefónica para realizar el procedimiento. No obstante, la documentación correspondiente a coalición nunca fue aportada y cuya constancia quedó registrada en el oficio de solicitud de inscripción por Coalición.

Que llegadas las 11:59 p.m. del 29 de julio de 2023, se cerró la plataforma sin que llegaran los documentos, lo que ocasionó la no inscripción de las candidaturas.

Por lo anterior, solicita declarar la improcedencia de la acción de tutela.

Teniendo en cuenta las respuestas emitidas por la **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL** y la **REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SAN DIEGO**, el Despacho ordenó la vinculación a este trámite, del movimiento político **COLOMBIA HUMANA**. Asimismo, se ordenó a la **REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SAN DIEGO**, publicar en su página Web, así como en la sede física de esa entidad, en un lugar de amplia visibilidad, el auto admisorio de la tutela.

Posteriormente, en aras de mejor proveer, se ofició a la **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL – REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SAN DIEGO** (Cesar), para que allegara los siguientes documentos e información: 1. Constancia de inscripción de la accionante como candidata al concejo municipal de San Diego por el movimiento político Colombia Humana. 2. Solicitud de inscripción por coalición Pacto Histórico allegada a la Registraduría el 29 de julio de 2023, a que hace referencia en su respuesta, con fecha y hora de recibido. 3. Informar hora establecida para el cierre de inscripciones de candidatos a las elecciones de octubre de 2023.

En el mismo auto, se solicitó a la accionante, allegar copia de su inscripción como candidata al concejo por el movimiento político Colombia Humana.

Ante el requerimiento, la entidad accionada allegó la documentación solicitada, por su parte, la accionante indicó que no cuenta con la información requerida pues esta reposa en la **Registraduría de San Diego**.

Así las cosas, es menester para el Despacho fallar con la jurisprudencia vigente y lo allegado al expediente, como en efecto lo hará.

## V. PROBLEMA JURÍDICO:

De acuerdo a la situación fáctica planteada, corresponde al Despacho determinar si la **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL – REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SAN DIEGO** (Cesar), vulneró el derecho fundamental a elegir y ser elegida de **LILIAM MAGRET BALLESTEROS PALLARES**, al no haber autorizado su inscripción como candidata al concejo municipal de San Diego (Cesar) por el movimiento político Colombia Humana y/o la coalición Pacto Histórico, o si el actuar del Registrador estuvo ajustado a las normas y procedimientos establecidos para la inscripción de candidatos.

## VI. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

Este Despacho Judicial es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Nacional y 37 del Decreto 2591 de 1991.

La Acción de tutela es un mecanismo de protección frente a la amenaza y/o vulneración de los derechos fundamentales por parte de una autoridad pública o particular. Así lo define el artículo 86 de la Carta Política y lo repiten los decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, por medio de los cuales, se desarrolló legislativamente dicho amparo constitucional.

Dicha herramienta constitucional se caracteriza por su efecto inmediato, subsidiario y residual, ya que por disposición constitucional y legal solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En este sentido se ha pronunciado la Corte en reiteradas oportunidades, de la siguiente manera:

*"(...) 8. La Constitución en su artículo 86 establece que la tutela procederá únicamente cuando la persona que denuncia la vulneración de derechos fundamentales **no cuente con otro medio judicial para la salvaguarda de sus derechos, excepto cuando se utilice esta acción como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable**. Por su parte, el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 6 contempla las causales de improcedencia de la misma, entre las cuales se encuentra la existencia de otros medios de defensa judicial, pero recordando que "(...) la existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (...)".*

*9. De acuerdo con lo anterior, es reiterada y abundante la jurisprudencia de esta Corte que ha dicho que la acción de tutela tiene carácter residual y*

*subsidiario, y por lo tanto solo procede en los siguientes casos: **(i) cuando la persona no cuenta con otro medio de defensa judicial, (ii) cuando el medio judicial existente es ineficaz, o (iii) cuando se interpone para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual el amparo deberá ser transitorio.** Al analizar cada una de las circunstancias descritas, el juez debe hacer un análisis exhaustivo de las mismas, para determinar con suficientes argumentos la procedencia o no de la acción en cada caso concreto”.*<sup>1</sup> Resaltos fuera de texto.

Así las cosas, atendiendo el principio de subsidiariedad, la procedencia de esta vía judicial excepcional se supedita al agotamiento previo de los otros medios ordinarios con que cuente el interesado, y sólo ante la inexistencia o inoperancia de estos, es posible acudir a la acción constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

De lo expuesto se colige, que la acción de tutela no es una vía judicial alternativa o simultánea a la cual pueda acudirse, en remplazo de aquellos mecanismos judiciales ordinarios que ha dispuesto el legislador para resolver las controversias de todo orden, sean estas por vía de la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa, sino que como ya se dijo, es un mecanismo subsidiario que solo procede ante la falta de eficacia y oportunidad de aquellos frente a los derechos constitucionales.

En este orden de ideas, previo a resolver el problema jurídico planteado, es preciso examinar los requisitos de procedibilidad para alegar la protección de los derechos fundamentales invocados en el caso particular.

En cuanto a la **Legitimación en la Causa por Activa**, el Decreto 2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Nacional, contempla que la legitimación por activa para presentar acción de tutela se acredita: (i) **en ejercicio directo de la acción**; (ii) por medio de representantes (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas); (iii) a través de apoderado judicial; y (iv) utilizando la figura jurídica de la agencia oficiosa.

En el caso que nos ocupa, la señora **LILIAM MAGRET BALLESTEROS PALLARES**, interpone acción de tutela en nombre propio, por considerar que su derecho fundamental a elegir y ser elegida está siendo vulnerado por la entidad accionada, de tal manera que para el Despacho se acredita plenamente la legitimación en la causa para actuar, por parte del accionante.

Tratándose de la **Legitimación en la Causa por Pasiva**, esta recae en quien tenga la aptitud legal por la cual está llamado a responder, bien sea por la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales; cabe agregar que según el artículo 86 de la Carta Política, por regla general será procedente la protección tutelar frente a las autoridades públicas y en forma excepción, frente a los particulares, atendiendo lo reglado en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.

Aplicado al caso en particular, se tiene que el accionante aduce que la **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL – REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SAN DIEGO** (Cesar); no inscribió su candidatura al concejo

<sup>1</sup> Corte Constitucional, Sentencia T-004 de 2011.

municipal de San Diego (Cesar) como candidata del movimiento político Colombia Humana y/o la Coalición Pacto Histórico, vulnerando con ello sus derechos fundamentales, de manera que la parte accionada está legitimada por pasiva, como quiera que a esta se atribuya la vulneración de los derechos fundamentales del accionante.

En lo que respecta al requisito de **Inmediatez**, el accionante cuenta con término prudencial entre el hecho o la conducta causante de la amenaza o presunta vulneración de sus derechos fundamentales, y el momento en el invoca su protección por vía de tutela.

En el presente asunto, el hecho que la accionante considera vulnera sus derechos, esto es, la no inscripción de su candidatura al concejo municipal de San Diego (Cesar), ocurrió el veintinueve (29) de julio de 2023 y la acción de tutela fue interpuesta el día treinta y uno (31) del mismo mes y año, correspondiéndole en principio al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Sandiego, quien mediante auto de 01 de agosto de 2023, ordenó la remisión a los Juzgados del Circuito de Valledupar, correspondiéndole por reparto a esta agencia judicial el 08 de agosto de la presente anualidad, por tanto; se da por satisfecho este requisito.

Finalmente, el requisito de **Subsidiariedad**, tal y como se colige del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, se haya interpuesto como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o pese a contar con otros mecanismos judiciales, estos se tornen insuficientes para evitar la vulneración del derecho fundamental.

En el caso particular, la accionante no dispone de ningún mecanismo idóneo y efectivo para reclamar su derecho a elegir y ser elegida que considera conculcado, distinto a la acción de tutela, teniendo en cuenta los términos y procedimientos establecidos para el proceso electoral.

Por ende, el Despacho encuentra acreditados los requisitos de procedencia de la tutela, por lo que corresponde decidir de fondo el presente asunto.

Cumplidos los requisitos de procedencia de la acción de tutela, procedemos al estudio de fondo del presente asunto, en aras de determinar si los derechos fundamentales del accionante están siendo transgredidos.

En el caso que nos ocupa, la accionante considera conculcado su derecho fundamental a elegir y ser elegida, por la no materialización de su inscripción como candidata al concejo municipal de San Diego (Cesar) por el movimiento político Colombia Humana y/o Coalición Pacto Histórico.

Aduce la accionante, que inicialmente realizó la inscripción de su candidatura con el aval del movimiento político Colombia Humana, sin embargo, con posterioridad a ello, el Registrador revocó la inscripción inicial para proceder a realizarla por la Coalición Pacto Histórico, la cual no se pudo concretar porque llegadas las 11:59 p.m. del veintinueve (29) de julio de 2023, hora y fecha en que se cerraba la plataforma de la Registraduría dispuesta para la inscripción de

candidatos, no llegaron los coavales de los partidos que conforman dicha coalición.

Al respecto, el **Registrador del Municipio de San Diego** (Cesar), aduce que la inscripción no se pudo realizar, toda vez que hasta la hora del cierre de las inscripciones para los comicios electorales del veintinueve (29) de octubre de 2023, la solicitud de inscripción presentada por la Coalición Pacto Histórico, no contaba con los documentos que acreditaran el cumplimiento de los requisitos necesarios para tal fin, entre ellos, los coavales de los partidos y/o movimientos políticos que conforman la coalición.

Afirma el Registrador, que pese a que la solicitud de inscripción llegó a las 10:04 p.m. del último día dispuesto para el efecto, en aras de garantizar los derechos políticos de los interesados, le dio trámite a la misma y esperó hasta las 11:59 a que aportaran a cabalidad los requisitos para la inscripción, lo cual nunca ocurrió.

Pues bien, la Ley 1475 de 2011, mediante la cual se reglamenta los procesos electorales, respecto la inscripción de candidatos, dispone lo siguiente:

**“Artículo 28. Inscripción de candidatos. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus estatutos. Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta -exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros.**

*Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica podrán inscribir candidatos y listas para toda clase de cargos y corporaciones de elección popular, excepto para la elección de congresistas por las circunscripciones especiales de minorías étnicas. (...)*

**Artículo 29. Candidatos de coalición.** Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica coaligados entre sí y/o con grupos significativos de ciudadanos, podrán inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. El candidato de coalición será el candidato único de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ella. Igualmente será el candidato único de los partidos y movimientos con personería jurídica que aunque no participen en la coalición decidan adherir o apoyar al candidato de la coalición. (...)

*En el formulario de inscripción se indicarán los partidos y movimientos que integran la coalición y la filiación política de los candidatos. (...)*

**PARÁGRAFO 2o. La suscripción del acuerdo de coalición tiene carácter vinculante** y por tanto, los partidos y movimientos políticos y sus directivos, y los promotores de los grupos significativos de ciudadanos no podrán inscribir, ni apoyar candidato distinto al que fue designado por la coalición. La inobservancia de este precepto, será causal de nulidad o revocatoria de la inscripción del candidato que se apoye, diferente al designado en la coalición.

*La autoridad electoral ante la cual se realiza la inscripción verificará el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la misma y, en caso de encontrar que los reúnen, aceptarán la solicitud suscribiendo el formulario de inscripción en la casilla correspondiente.*

**Artículo 32. Aceptación o Rechazo de Inscripciones.** *La solicitud de inscripción se rechazará, mediante acto motivado, cuando se inscriban candidatos distintos a los seleccionados mediante consultas populares o internas, o cuando los candidatos hayan participado en la consulta de un partido, movimiento político o coalición, distinto al que los inscribe. Contra este acto procede el recurso de apelación de conformidad con las reglas señaladas en la presente ley.*

*En caso de inscripción de dos o más candidatos o listas se tendrá como válida la primera inscripción, a menos que la segunda inscripción se realice expresamente como una modificación de la primera.”* Resaltos fuera de texto.

Como puede advertirse, en el procedimiento establecido para la inscripción de candidatos a cargos de elección popular, los partidos, movimientos políticos y coaliciones, cumplen un papel preponderante, en la medida en que a ellos corresponde presentar las solicitudes de inscripción con el lleno de requisitos, para lo cual cuentan con un término de un (1) mes que inicia cuatro (4) meses antes de la fecha de la elección.

En el caso particular, se tiene que la Coalición Pacto Histórico, a través de la cual se presentó la candidatura de la accionante, sin los requisitos legales establecidos para inscribirse, toda vez que con la referida solicitud no se aportaron los nombres de los partidos o movimientos políticos que conformaban la coalición, así como los coavales de cada uno de estos partidos.

De esta manera, para el Despacho es claro que, ante una solicitud de inscripción sin el lleno de requisitos para el efecto, no podía proceder el Registrador a hacer efectiva dicha inscripción.

En efecto, la responsabilidad de los partidos en lo que atañe a la inscripción de sus candidatos a cargos de elección popular, fue expuesta por la Corte Constitucional en reciente sentencia de unificación SU-213 de 2022, en la cual dispuso:

*“Con fundamento en lo expuesto, la Sala Plena concluye que los titulares del derecho a inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular son los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos, y las coaliciones conformadas por estas organizaciones políticas. Tanto la Constitución como el Código Electoral, el Estatuto Básico de los Partidos Políticos y la Ley Estatutaria 1475 de 2011 definieron los requisitos que, para el efecto, deben cumplir los interesados, de acuerdo con la modalidad de postulación escogida.*

*En el asunto sub examine, son cuatro las reglas dispuestas por el legislador ordinario y estatutario y la jurisprudencia que deben ser tenidas en cuenta para resolver los problemas jurídicos planteados: i) la inscripción de la candidatura debe ser realizada por el representante legal del partido o movimiento político o por la persona a quien él delegue, o por el comité de inscriptores del grupo significativo de ciudadanos por el cual se realiza dicha*

*inscripción, según el caso; ii) con la firma del formulario de inscripción, el candidato no solo acepta la candidatura, sino que, además, declara bajo la gravedad de juramento que forma parte del partido o movimiento político referido en el propio formulario o que su candidatura fue promovida por un determinado grupo significativo de ciudadanos; iii) **en el caso de la inscripción de candidaturas de coalición, en el formulario respectivo se deben señalar los partidos y movimientos que integran la coalición y la organización política a la que pertenece el candidato, la cual, por regla general, es la que otorga el aval principal en coalición** y iv) **este aval y los coavales deben acompañar el formulario de inscripción y entregarse a la respectiva autoridad electoral.***

*En consecuencia, en el caso de las candidaturas de coalición, tanto el formulario de inscripción de la candidatura como los avales principales en coalición y los coavales otorgados por los partidos y movimientos políticos que forman parte de ella sí constituyen medios idóneos para determinar la filiación política del candidato.”* Resaltos fuera de texto.

En este orden, en atención a que en este caso la inscripción pretendía hacerse por medio de la Coalición Pacto Histórico, y como quiera que fue advertida que ello implicaba una “reversión”<sup>2</sup> a su postulación inicial, era obligación de la coalición radicar la solicitud de inscripción de candidatos con los requisitos legales para el efecto, para lo cual, se itera contaba con un término de un (1) mes que fenecía el 29 de julio de 2023.

Por ende, para el Despacho es claro que el hecho de que la inscripción de la accionante y demás candidatos no pudiera realizarse, se debió a que la solicitud de inscripción fue presentada en las últimas horas del día del cierre de inscripciones, sin contar además con los documentos que soportaran el cumplimiento de los requisitos, circunstancia que no puede ser endilgada al Registrador, pues tal como se dejó anotado en párrafos precedentes, la inscripción de los candidatos a los cargos de elección popular, es responsabilidad de los partidos y movimientos políticos.

Por lo que, a dicho funcionario, ante la solicitud presentada, le correspondía verificar los requisitos exigidos por la normatividad, por tanto, al no estar completos, no podía proceder a la inscripción.

Así las cosas, no se evidencia en este caso, vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, razón por la cual se niega el amparo deprecado y se despachan desfavorablemente las pretensiones de la tutela.

**En razón y mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,**

### **RESUELVE:**

**PRIMERO: NEGAR LA TUTELA** del derecho fundamental a elegir y ser elegida de la señora **LILIAM MAGRET BALLESTEROS PALLARES**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

<sup>2</sup> Folio 60 contestación de la Registraduría Municipal del Estado Civil de San Diego.

**SEGUNDO:** Por el medio más expedito notifíquese a los interesados de esta acción, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 30 del decreto 2591 de 1991.

**TERCERO:** En caso de no ser impugnada envíese esta actuación a la Corte Constitucional, para una eventual revisión, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 31 Ibídem.

**CUARTO:** Ordenar a la **REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SAN DIEGO**, que en el término de un (1) día contado a partir del recibo de la comunicación, publique esta providencia en su página Web, así como en la sede física de esa entidad, en un lugar de amplia visibilidad. Cumplido lo anterior, remita a este Despacho prueba de la respectiva publicación.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



LUISA FERNANDA SOTO PINTO.  
JUEZA.